
América Latina: la dimensión laboral del BID en la década de los noventa

Luis Fernando Talavera Aldana*

Resumen

Se trata de un replanteamiento del mundo del trabajo en América Latina a partir de proposiciones explicativas contenidas en estudios recientes de investigadores del BID. El ensayo se divide en tres partes: primero, en el marco macroeconómico se analizan los efectos de los flujos de capital en la creación de empleos, enseguida se define y comenta en sus explicaciones causales la "paradoja laboral"; por último se revisan los determinantes de la oferta laboral, incluyendo los salarios y los sindicatos. Al final se vierten algunos elementos críticos para una mejor comprensión de los planteamientos del BID.

La eficiencia económica es una relación entre fines y medios regulada no por cantidades físicas sino por sus valores monetarios. Una situación es ineficiente cuando se puede alcanzar el fin deseado con menos medios o cuando los medios usados pueden producir más de los bienes deseados (Heyne, 1993). Eventualmente este concepto sufre críticas por considerarlo limitado al referirse a las políticas públicas, ya que la eficiencia no repara en otros valores que tienen una importancia igual o mayor que el dinero entrando así en el terreno de la equidad.

Cuando de equidad se trata conviene recordar algunas de las aportaciones de Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998, quien con la economía del bienestar produjo numerosos análisis críticos sobre los problemas de la desigualdad, aunque con la prevención de

* Coordinador de Investigación y Análisis Económico, Facultad de Economía, UNAM. El autor agradece los valiosos comentarios de Hugo Contreras y Eliezer Morales. Este trabajo se realizó en el marco del proyecto "México-Estados Unidos: credibilidad macroeconómica en economías abiertas" auspiciado por la DGAPA-UNAM.

Abstract

The present essay is about a new approach of Latin America's labor world deriving from different explanatory proposals found in recent IDB researchers' studies. The essay is divided in three parts: first, the effects of capital flows in the creation of jobs is analyzed in the macroeconomic framework; secondly the "labor paradox" is defined and explained; finally the determinants of labor supply, including salaries and labor unions, are explained. In the end certain critical elements are provided for a better understanding of the IDB's proposals.

que ahí no puede esperarse mucha ayuda porque una gran parte de esa teoría se ocupa de un conjunto de proposiciones que evitan los juicios sobre la distribución del ingreso, concentrándose en cuestiones que no implican conflictos entre individuos, grupos o clases. Sen apunta que el llamado teorema "básico" de la economía del bienestar se ocupa de la relación entre los equilibrios competitivos y el óptimo de Pareto, este último desarrollado "para evitar la necesidad de emitir juicios sobre una distribución".¹

Otras consideraciones igualitarias en forma de juicios sobre el bienestar proponen diversos axiomas alternativos. Un caso interesante es el axioma de equidad débil que señala: una persona *i* tiene un nivel de bie-

¹ Un cambio implica una mejora de Pareto si nadie se encuentra en peor situación y alguien se encuentra en mejor situación. Una situación es un óptimo de Pareto si no existe ninguna otra situación posible tal que el movimiento hacia la misma represente una mejora de Pareto. En otras palabras: si la suerte de los pobres no puede mejorarse sin reducir la opulencia de los ricos, la situación sería un óptimo de Pareto a pesar de la disparidad entre ricos y pobres (Sen, 1979).

nestar inferior al del individuo j para cada nivel de ingreso individual. En este caso al distribuir un total dado de ingresos entre n individuos incluyendo a i y a j , la solución óptima ha de ofrecer a i un nivel más elevado de ingreso que a j . El requisito es bastante poco exigente porque no especifica qué cantidad más ha de proporcionarse al individuo pobre i dejando abierta la posibilidad de que ésta sea mínima. Un criterio igualitario más fuerte que el anterior es el "minimax" de Rawls que propone un objetivo social consistente en maximizar el nivel de bienestar del individuo que se encuentra en la peor situación (Sen, 1979).

Mientras en la teoría el debate continúa, en el mundo de la política ocurre lo mismo. Efectivamente, en 1992 tuvo lugar una decepcionante reunión en Río de Janeiro llamada la "Cumbre de la Tierra"; ahí se pretendió inútilmente compatibilizar desarrollo económico eficiente con justicia social distributiva y, más difícil aún: incluyendo la conservación del medio ecológico.²

Ese parece ser el caso con los países de América Latina cuyo análisis económico relacionado con el mundo del trabajo es el objeto de este artículo. El estudio estará cimentado en los planteamientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el banco de desarrollo multilateral más grande y antiguo de la región latinoamericana y caribeña, fundado en 1959 para otorgar créditos a 19 países de la región. En la actualidad el Banco cuenta con 46 miembros que incluyen a países industrializados de otros continentes, convirtiéndose así en una institución con gran movilización de recursos hacia la región. En 1998, por ejemplo, manejó préstamos por 10 mil millones de dólares.

Conviene recordar que la mayoría de los países de América Latina se encuentra en un proceso de liberalización comercial, generalmente acompañado por un conjunto de reformas orientadas al mercado como reemplazo a la política de industrialización apuntalada en la sustitución de importaciones. En la década de los ochenta Chile, México y Bolivia fueron los países pioneros en abrir sus fronteras al instrumentar grandes reducciones a las tarifas de importación. Poco después se unieron otros países como Argentina, Brasil, Colombia, Jamaica, Perú, Uruguay, Venezuela. Todos ellos ahora están más expuestos que antes a la implacable

competencia internacional, principalmente de los países del sudeste asiático (Belser, 1998).

El ensayo inicia con un apartado que desarrolla causalidades importantes en el mercado laboral dentro de un marco macroeconómico de flujos de capital sujeto a externalidades que distorsionan los procesos de ajuste, además de incluir algunas imperfecciones informativas y de instrumentación en la política económica. El segundo apartado revisa el crecimiento económico y el mercado laboral a la luz de tres planteamientos, resaltando la propuesta del BID que hace un recuento del avance de las reformas macroeconómicas, la liberalización financiera y las privatizaciones. El tercer apartado presenta opiniones de trabajadores latinoamericanos seguido por un análisis de la oferta laboral en la región y un resumido panorama sindical. Se concluye con una opinión crítica a las tareas del BID.

I. El empleo en el marco macroeconómico de flujos de capital

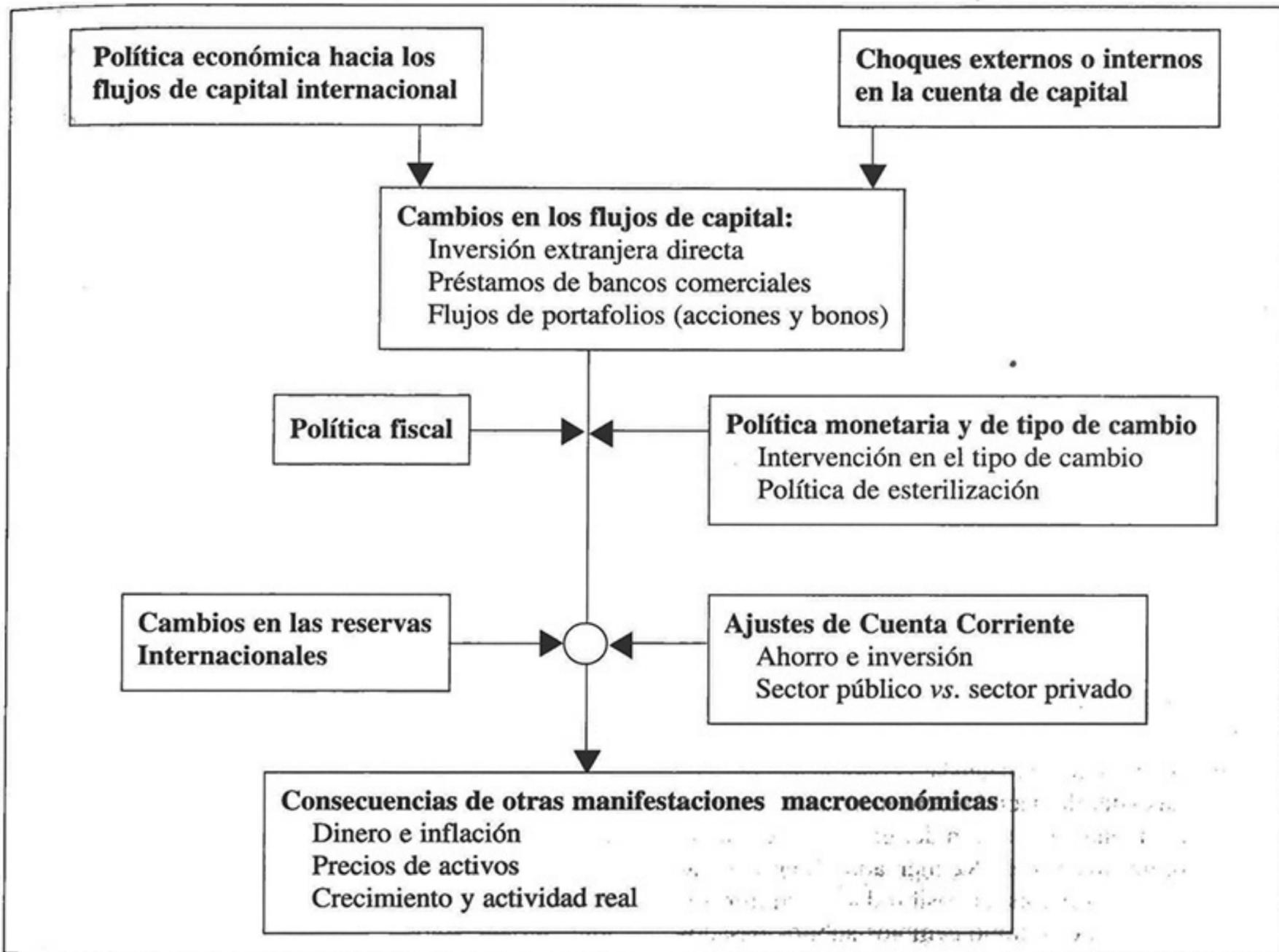
En la actualidad la dinámica de la mayor parte de los mercados laborales de América Latina está sujeta a una demanda cuya capacidad expansiva depende en última instancia de los flujos de capital externo. La problemática de tales flujos se manifiesta en un azaroso mecanismo de transmisión que pone en relieve el Diagrama 1, que conecta políticas internacionales con políticas económicas domésticas, las cuales determinan el comportamiento de un mercado de trabajo contenido implícitamente en el último rubro del cuadro inferior que a la letra dice "Crecimiento y actividad real".

Por ello el análisis comienza con el marco macroeconómico de flujos de capital. Ahí la preocupación clave de la política económica de los países receptores tiene su eje en la necesidad de administrar los flujos de capital atraídos mediante una macroeconomía estable, de bajo riesgo, que mantenga atractivas tasas de interés (Gavin, Hausmann y Leiderman, 1997). Lo anterior a pesar de que la necesaria estabilidad macroeconómica en los países receptores sea alterada por los disturbios provocados por esos mismos flujos de capital extranjero necesarios para el crecimiento económico.³

² Reuniones anteriores insistieron en el mismo tema con resultados similares: el Informe de Tommaso Padoa-Schiopa para la Comisión Económica Europea en 1987 llamado *Eficiencia, estabilidad y justicia distributiva* y en 1990 la "nueva" estrategia de la CEPAL titulada *Transformación productiva con equidad* (Alvater, 1994).

³ En 1997 Latinoamérica recibió 73 mil millones de dólares, equivalentes a más de la mitad de los flujos de capital destinado a los países en desarrollo (Lora y Olivera, 1998).

Diagrama 1
El marco macroeconómico de flujos de capital



Fuente: Reelaboración propia basada en Gavin, Hausmann y Leiderman (1997).

Debido a que dichos flujos de capital conllevan una alta volatilidad causada, principalmente, por factores externos a la región latinoamericana, Gavin *et al.* (1997) sugieren la necesidad de administrar su entrada por medio de regímenes de política económica que reduzcan la vulnerabilidad de la economía ante fluctuaciones causadas por el estrechamiento de la entrada o, más aún, la salida abrupta de capital, que obliga a las autoridades económicas al establecimiento de aflictivos ajustes macroeconómicos y financieros.⁴

⁴ Los factores externos que pueden provocar la salida de capital de América Latina son básicamente dos: el aumento en las tasas internacionales de interés y la disminución del superávit en la cuenta corriente de los países inversores, así como "contagios" provenientes de otros países den-

Más aún, continúan Gavin *et al.*, a fin de mantener un flujo suficiente de inversiones extranjeras, la estabilidad macroeconómica doméstica requiere que, en caso de una fuga de capitales, pueda disponer de capacidad inmediata de ajuste que evite efectos perniciosos tales como los aumentos de las tasas de interés domésticas y las reducciones de valor del capital fijo. Otra dificultad en la macroeconomía se presenta cuando una baja en la oferta de financiamiento externo obliga a reducir el gasto fiscal creando, a su vez, situaciones infortunadas para la inversión doméstica que pueden

tro o fuera de la región como los llamados curiosamente "efecto tequila", "efecto samba", "efecto dragón", etcétera.

contribuir a generar una contracción súbita de la economía.

Otro efecto podría presentarse cuando un aumento de los precios relativos incrementa el producto en el sector de artículos exportables propiciando así la importación de tecnología que podría acrecentar la producción de artículos domésticos.⁵ Ese incremento de los precios relativos modifica la creación de empleos que necesita reubicar grandes cantidades de trabajadores. El efecto se refuerza con el sector de artículos exportables que, al incrementar su producción por medio de nueva tecnología (ahora más barata por el aumento de los precios relativos), ayuda a expulsar fuerza de trabajo hacia un sector doméstico menos desarrollado produciéndose así una terciarización, es decir, una desindustrialización del trabajo que provoca aumentos del sector informal de la economía.

Otro problema se presenta cuando en mercados financieros expuestos al peligro de choques externos se dificulta optimizar la toma de decisiones de política económica por razones como las siguientes; 1) incompletitud de los mercados financieros internacionales que impide asegurarse contra los riesgos asociados a la fuga de capitales, 2) mercados financieros sujetos a padecer burbujas y contagios, situaciones muy temidas por los inversionistas quienes tratan de "protegerse" con decisiones no fundamentadas económicamente, como es el caso del llamado "efecto manada", 3) varios de los fundamentos dependen del grado de acceso de una economía emergente a los mercados internacionales de capital dándose así la posibilidad de equilibrios múltiples, entendidos como cambios súbitos basados en la sensibilidad de los mercados que pueden convertirse en profecías autovalidadas.

Más todavía, los mercados financieros domésticos pudieran estar sujetos a información imperfecta o a políticas económicas que originen intermediaciones subóptimas para la entrada de capitales. Esto podría aumentar la vulnerabilidad de una economía con escasa estabilidad de precios y bloqueos crecientes en la administración de la demanda agregada, lo cual generaría un círculo vicioso que constriñera las entradas potenciales de capital. De ese modo los mercados de productos y de trabajo estarán sujetos a esa clase de externalidades distorsionantes de los procesos de ajuste,

⁵ El aumento de los precios relativos proviene de programas de estabilización y reformas estructurales que propician mayores entradas de capital los cuales inducen incrementos en el valor del tipo de cambio, reducen el costo del capital y aumentan la productividad.

procesos impulsados por los cambios en los flujos de capital que provocan respuestas subóptimas en el sector privado (Gavin *et al.*, 1997).

Gavin *et al.* ponen como ejemplo los efectos ocurridos después de la crisis mexicana de 1994-1995: sus secuelas de contagio para otros países de América Latina, en especial Argentina, y cómo uno de los problemas a debate en torno a la forma de evitar o por lo menos paliar la salida brusca de capitales se refiere a la regulación para su entrada o salida, no como una panacea sino como uno de los instrumentos de política económica que pueden reducir la volatilidad de los flujos de capital.

En este punto dichos autores señalan que en el debate sobre la regulación de la entrada de capitales se considera la posibilidad de un desgaste causado por inversionistas que aprenden la forma de evitar esas restricciones sobre todo en mercados financieros tan poco desarrollados como los de América Latina. Al respecto son interesantes las experiencias de Chile y Colombia que, al restringir el pago de la deuda de corto plazo, de forma marginal y quizá sólo temporalmente, pretenden ajustar la magnitud y el tipo de flujo de capitales que ingresan a sus economías.⁶

Ese tipo de regulación tiene un gran defecto: pasa por alto el hecho de que los inversionistas extranjeros, al igual que los de las bolsas de valores, sustentan sus entradas en sus esperanzas y sus salidas en sus miedos y como los miedos son más fuertes que las esperanzas pudiera ser más conveniente reglamentar las primeras, es decir las entradas de capital y no sus salidas. Otro argumento en contra de regular las salidas de capital es que pudieran incentivar la instrumentación de políticas económicas no sujetas a la disciplina del mercado (Gavin *et al.*, 1997).

Cuando no son suficientes todas esas medidas domésticas ideadas para superar las crisis financieras causadas por la salida súbita de capitales, la economía en peligro necesita complementarse con fondos de rescate internacional que podrían ser otorgados como préstamos. Estos podrían facilitarse siempre que la economía en problemas mostrara avances en rubros tales como la fortaleza de su sistema financiero, la naturaleza de sus instituciones fiscales, la credibilidad de su política económica y la pertinencia de las regulaciones en el mercado de trabajo.

⁶ Aunque ambos países no se han enfrentado todavía a retos significativos en las fugas de capital, sí pudieron resistir sin mayores problemas el contagio de la crisis mexicana de 1994-95.

En las economías con problemas financieros las desgracias no terminan porque ¿qué institución multilateral estaría dispuesta a otorgar empréstitos al país en dificultades a pesar de pasar con buenas calificaciones la "prueba" doméstica? ¿el FMI, el BID, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Al igual que en la crisis asiática de 1997-98 podría ser el FMI el prestamista internacional de última instancia;⁷ en América Latina esta institución probablemente se coordinaría con el BID, como en el caso de la crisis mexicana de 1994-95.

En años recientes el valor de las entradas de capital en el sudeste asiático y en Latinoamérica equivalen a un 3-4 por ciento del producto interno en los países de ambas regiones. La diferencia estriba en que el ahorro que captan los países del sudeste asiático (excepto Filipinas) los transforman en inversiones mientras que en América Latina (excepto Chile) los consumen, en su mayor parte. Esta utilización del ahorro no es nueva; a principios de los años setenta, después de una aceleración del crecimiento, los países del "milagro" asiático aumentaron su tasa de ahorro mientras en Latinoamérica el ahorro permaneció estancado (Gavin, Hausmann y Talvi, 1997).

Según los investigadores del BID, el círculo virtuoso de ahorro-crecimiento explica las diferencias entre el desenvolvimiento del sudeste de Asia y el de América Latina, porque, aunque existen otros determinantes del ahorro, ninguna de esas diferencias tiene un gran peso cuantitativo.⁸ En esa vena cabría pensar que el destino del ahorro estuviera relacionado con el crecimiento del ingreso en América Latina con consecuencias desfavorables para el avance de sus economías.

El planteamiento del nuevo contexto latinoamericano sobre los problemas del marco macroeconómico de flujos de capital desarrollado en las investigaciones del BID y resumido en este apartado, se hace necesario para ubicar fuentes importantes de crecimiento del empleo en la región. Otra visión contrapuesta mostraría una explicación sesgada cuando no se consideran los impactos adversos de la política económica doméstica

⁷ Para información más detallada véase (Talavera, 1999).

⁸ Otros determinantes del ahorro son la distribución del ingreso, la distribución por edades de la población y otras mediciones demográficas (Gavin, Hausmann y Talvi, 1997). Una diferencia entre ambas regiones es el hecho, tan controvertido, del débil compromiso de los países del sudeste asiático con los estándares laborales impulsados por la Organización Internacional del Trabajo, los cuales tienen una mayor aceptación en Latinoamérica (Belser, 1998). Tal desigualdad puede considerarse como competencia desleal al afectar negativamente la balanza comercial de la región latinoamericana.

para atraer los flujos de capital, más específicamente, tal omisión, inconcebible en investigadores calificados, muestra una posición acrítica pero no ingenua en favor de la burocracia autóctona y en perjuicio de los contribuyentes.

En ese tenor, los investigadores del BID parecen no advertir que las políticas discrecionales pueden afectar negativamente a la macroeconomía y también a la eficacia de la micro al bajar sus niveles de productividad, sin excluir la posibilidad de mantener una economía de privilegios grupales siempre sustentada en pies de barro. Pareciera ser que el establecimiento de reglas de política económica fuera un campo vedado en los planeamientos del BID para la región.

Un segundo aspecto crítico se refiere a una ausencia, un error cometido por especialistas en el tema al ignorar un problema fundamental acerca de los flujos de capital: la enorme capacidad tecnológica que permite a los dueños del capital retirar sus fondos con un teclazo dado en la red desde su lugar de origen, por lejano que se encuentre, invalidando o, por lo menos, mermando reglamentaciones promovidas por los gobiernos de los países receptores de capital. Una vez identificada la nueva fuente del empleo basada en la entrada de capitales y algunos de sus problemas, conviene adentrarse en las dificultades de los mercados de trabajo en la región por medio de la profundización de la llamada "paradoja laboral" que enseguida se explica.

II. La paradoja laboral

En América Latina la paradoja laboral es el nombre con el cual una investigación promovida por el BID especifica una realidad en el mercado de trabajo de la región al señalar:

a pesar de la estabilización macroeconómica y de las reformas estructurales, los problemas del empleo han persistido en América Latina. La década de los noventa ha mostrado una baja en la creación de empleos, las tasas de desempleo se han estancado alrededor del 10 por ciento, el sector de empleo informal se ha expandido y los incrementos de los salarios reales han sido favorables solamente para los trabajadores capacitados (Lora y Olivera, 1998).

Por otro lado, es notorio que en América Latina el bajo crecimiento del empleo y los bajos salarios son

factores de gran peso que la colocan en el mundo como la región con mayor desigualdad de ingresos al concentrar un 5 por ciento de la población más rica más de 26 por ciento del ingreso total al tiempo que el 30 por ciento de la población más pobre percibe, en promedio, solamente menos de 8 por ciento (Hausmann y Székely, 1999).

Ahora bien, en el nuevo marco macroeconómico el problema de esta inequitativa distribución del ingreso comienza en los mercados laborales con una eficiencia marcada, en el corto plazo, por la macroeconomía de flujos de capital, que acarrea una serie de peligros originados en el sector financiero y repercutidos en el sector real de la economía con el consiguiente impacto en empleos y salarios. Ante tal situación se hace necesario contestar una pregunta: ¿cómo afecta al mercado laboral una macroeconomía con flujos de capital?

La respuesta amerita revisar tres proposiciones diseñadas para administrar los flujos de capital, muy imbricadas pero con diferentes orígenes y con variaciones sobre cómo mantener una economía con ingreso de capitales, que permanezcan y no abandonen intempestivamente el país receptor pudiendo así fomentar el crecimiento económico y, por ende, la creación de empleos. Esos planteamientos fueron elaborados por una tripleta de organismos: el Instituto de Economía Internacional (IEI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los dos primeros se describirán brevemente y el tercero se desarrollará en el resto del apartado.

La propuesta primigenia proviene del IEI con el controvertido nombre de "Consenso de Washington" establecido a principios de los años noventa y contenido en 10 reformas de política económica que se describen a continuación:

- 1) Disciplina fiscal para conseguir un presupuesto público sin déficit ni inflación,
- 2) Priorización del gasto público hacia áreas que mejoren la distribución del ingreso,
- 3) Reforma tributaria con ampliación de la base impositiva,
- 4) Liberalización financiera que desemboque en tasas de interés competitivas,
- 5) Tipos de cambio que fomenten las exportaciones,
- 6) Liberalización comercial con aranceles de 10-20 por ciento,
- 7) Inversión extranjera directa con el mismo trato que la nacional,
- 8) Privatización de empresas paraestatales,

9) Desregulación que permita la libre competencia y

10) Derechos de propiedad con inclusión del sector informal (Williamson, 1994).⁹

Conviene diferenciar esta propuesta suficientemente explícita con "el presunto carácter neoliberal de las políticas macroeconómicas en América Latina" no reconocido como frontera de debate, ni por las capas dirigentes latinoamericanas desinteresadas en "explicitar los fundamentos doctrinales de sus políticas" ni por "la desencaminada enjundia de las fuerzas izquierdistas por enarbolar alguna tesis 'dura' —por chata que ella sea..." (Contreras, 1997).

Además, el Consenso de Washington enfatiza la necesidad de mantener un soporte político que haga factibles las reformas, lo anterior prohija un conjunto de sugerencias e hipótesis que se enumeran enseguida:

- Hipótesis de la crisis: un buen momento político para introducir las reformas es después de una crisis percibida por toda la población.
- Hipótesis por mandato: las reformas se establecerán cuando un gobierno llega al poder habiendo anunciado que introducirá esas reformas.
- Hipótesis de luna de miel: las reformas deben instrumentarse tan pronto como el gobierno tome posesión a fin de que sus resultados sean apreciados antes de que termine su periodo.
- El modelo partidario: subrayar a quiénes van dirigidos los beneficios de las reformas institucionalizando así las políticas que sirven a intereses particulares para estabilizar la riqueza y proteger el triunfo político de ciertos sectores, industrias o regiones (propuesta de Robert H. Bates).
- La necesidad de un líder político con una visión histórica y que no esté casado con la idea de reelegirse.
- La necesidad de un grupo de economistas con una visión común y coherente de lo que necesita hacerse y con autoridad suficiente para ejecutarlo.
- La existencia de un programa comprensivo de transformación de la economía acompañado de una rápida instrumentación.
- La presencia de una oposición fragmentada y demoralizada.

⁹ Si bien actualizada al cierre de los años noventa, la propuesta de John Williamson no ha perdido su espíritu original recogido en los 10 principios que aquí se presentan.

- La voluntad y la habilidad para apelar directamente al público saltándose los intereses establecidos (Williamson, 1994).

La segunda propuesta pertenece a investigadores del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres reunido en 1994-1995. Ahí el tema giró en torno al "Nuevo modelo económico en América Latina" y su efecto en la distribución del ingreso y en la pobreza, el cual más que de un modelo trata de un "proceso gradual en que los países pasan por diferentes fases" (Foxley, 1996).

En ese proyecto el Banco Mundial, apoyado en diversos estudios propios, aportó la caracterización de un proceso que debe recorrer tres fases. La fase uno arranca en 1982 con la crisis de la deuda buscando la estabilización macroeconómica. La fase dos comienza al ocurrir transformaciones estructurales: apertura comercial, proceso de privatización y proceso de liberalización financiera. Una vez que se ha cumplido con los requisitos de las dos fases anteriores será posible arribar a la fase tres que desarrolla una economía sustentable impulsada por un círculo virtuoso de constantes aumentos en inversiones y productividad.

Finalmente, la tercera propuesta es del BID, sus resultados pueden ser condensados en la paradoja laboral. En efecto, estadísticas del estudio publicado por el BID ratifican la paradoja: en la segunda mitad de los años ochenta los datos muestran un crecimiento económico promedio de la región de 2.7 por ciento y de 4 por ciento en el periodo de 1991 a 1997; sin embargo, el empleo aumentó 2.85 por ciento en el primer periodo y solamente un 2.8 por ciento en el segundo.

Dichos investigadores también corroboran cuantitativamente el avance en el cumplimiento de recomendaciones para mejorar los mercados, afirmando: América Latina en los años noventa incrementó su apertura comercial al disminuir restricciones a productos importados de la región reduciendo drásticamente los aranceles del 41.3 por ciento en promedio antes de las reformas, al 13.5 por ciento en 1995. También afirman que se allanó el camino hacia la estabilidad macroeconómica perdida en la década de los ochenta con datos como los siguientes: la inflación Latinoamericana en promedio fue menor al 10 por ciento en 1997, excepción hecha de un país con 30 por ciento, el déficit fiscal de la región se mantuvo en un nivel menor al 2 por ciento del producto en 1996 y sólo dos países tuvieron un déficit mayor al 5 por ciento.

Otros investigadores del BID como Lora y Olivera (1998) también detectaron cambios en una liberalización financiera que avanza en la mayoría de los países de la región caminando hacia la apertura al eliminar controles empeñados en determinar la tasa de interés, desmantelando sistemas dirigidos de crédito y reduciendo las reservas bancarias obligatorias a menos de 20 por ciento. En los ingresos fiscales el avance muestra, desde mediados de los años ochenta, una simplificación de los procedimientos para el pago de impuestos y una modernización de los códigos fiscales.

Respecto a la reforma planteada sobre la privatización de las empresas públicas los investigadores confirman avances paulatinos hasta abarcar 14 países y, aunque las ventas de empresas públicas exceden el 1 por ciento de su producto nacional, conviene recordar que existen algunos estancamientos provocados por una enconada resistencia social; por ejemplo, el caso mexicano donde el gobierno ha tenido que suspender la privatización plena de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

No obstante los obstáculos citados, el crecimiento del producto impulsado por los programas de estabilización y reformas en la década de los ochenta fue cumplido alcanzando un 2 por ciento anual aproximadamente. Este no fue el caso con el supuesto incremento del empleo que se debería haber alcanzado por las mejoras en el funcionamiento de los mercados, aunado a mayores niveles de eficiencia que darían como resultado un mecanismo más libre en la asignación de recursos productivos y, consecuentemente, un crecimiento del empleo.

Lora y Olivera (1998) proporcionan información adicional al diseñar un modelo econométrico que muestra una elasticidad unitaria del empleo con respecto a la oferta de trabajo mientras que la elasticidad del empleo con respecto a la tasa de crecimiento económico es aproximadamente 0.3.¹⁰ Dicho modelo comprende datos de seis países de la región: Argentina, Bolivia, Costa Rica, México, Perú y Venezuela. Sus resultados registran que: 1) antes y después de la "apertura" las tasas de crecimiento del empleo están asociadas al ciclo económico, 2) la tendencia al crecimiento de la fuerza de trabajo ha disminuido y 3) las ganancias permanentes producidas por las reformas no producen

¹⁰ Los autores aclaran que esa sensibilidad de empleo y crecimiento es estrictamente de corto plazo.

empleos porque se provienen de aumentos en la productividad.

Los resultados obtenidos por esos investigadores confirman la paradoja laboral implicada en la persistencia de los problemas del empleo en América Latina en los años noventa. Paradoja que puede resumirse en una secuencia como la siguiente: incremento en la entrada de capitales seguida de una apreciación del tipo de cambio causante, a su vez, del declive en los costos de maquinaria y equipo traducido en aumentos de productividad aprovechable para el crecimiento de la economía pero con alzas menores en el empleo. Paradoja laboral que se ha dado con una oferta de trabajo cuyas percepciones y características se analizarán enseguida.

III. Percepciones, oferta laboral y sindicatos

Los estudios que muestran avances en el crecimiento económico de la región no han sido suficientes para confortar a los trabajadores latinoamericanos. Estos viven en la incertidumbre económica, son retribuidos con bajos salarios y padecen dificultades en la búsqueda de empleo. Esas son las percepciones individuales registradas por el *Latinbarómetro*,¹¹ empresa encuestadora cuyos resultados son: un 19 por ciento de la población opina que es el desempleo el problema más grande de la actualidad, mientras que un 8 por ciento juzga que son los bajos salarios. Otro rubro dentro de ese rango porcentual es la educación con 16 por ciento y la criminalidad que empata el 8 por ciento de los salarios como el problema principal. La corrupción, la pobreza y la inflación obtienen de 7 a 6 por ciento, mientras que la vivienda y el medio ambiente están en el fondo con 2 por ciento, aproximadamente (Lora y Márquez, 1998).

El problema se complica cuando 70 por ciento de los latinoamericanos entienden que ellos en algún momento se verán involucrados en la situación de ser despedidos o de permanecer desempleados por un largo periodo. Las estadísticas señalan que el país menos expuesto a esta percepción de ser despedidos es Chile

con 46 por ciento, y el más expuesto es Perú con 76 por ciento. Del otro lado de la mesa, los patrones se quejan de deficiencias en la oferta de trabajo al mantener una baja calificación fincada en las deficiencias de un sistema educativo impropio para alcanzar las metas de una economía capaz de competir con el resto del mundo.

En un afán de explicar estas percepciones Duryea y Székely (1998) revisan las fuerzas principales con un energético componente inercial que tienen capacidad de moldear el tamaño y la calidad de la fuerza de trabajo: la transición demográfica y los cambios en la educación de la fuerza laboral. Más aún, señalan dichos autores, en la situación laboral de América Latina en la década de los noventa, este par de fuerzas tiene potencia explicativa tanto en la baja de creación de empleos, como en los cambios en la estructura del desempleo y en ampliaciones de la desigualdad salarial.

En el aspecto demográfico, Latinoamérica está marcada por una población que ha comenzado a envejecer como consecuencia de la reducción de las tasas de crecimiento poblacional ocurridas a partir de mediados de la década de los sesenta: en otras palabras, las nuevas generaciones serán cada vez más pequeñas, generándose así dos consecuencias relevantes: la caída de la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar y el crecimiento de la proporción de grupos de mayor edad.¹²

En América Latina, la tasa de crecimiento de la población ha declinado consistentemente desde mediados de los años sesenta (2.7 por ciento en 1965 y 1.6 por ciento en 1998) acorde con una transición demográfica común a casi todos los países del orbe y que CELADE-BID describen en cuatro etapas: primera, la etapa de bajo crecimiento de la población (a una tasa aproximada de 2.5 por ciento) resultante de tasas altas de fertilidad y de mortalidad; segunda, aumenta el crecimiento poblacional (3 por ciento) a causa de una disminución de la tasa de mortalidad mientras la fertilidad permanece en un nivel alto; tercera, la tasa de mortalidad permanece baja y la tasa de fertilidad disminuye generando la disminución de la tasa de crecimiento poblacional (aproximadamente 2 por ciento); cuarta, la tasa de crecimiento de la población se estabiliza (alrededor de 1 por ciento) como consecuencia de tasas bajas tanto de mortalidad como de fertilidad.

¹¹ El *Latinbarómetro* es una fuente estadística anual de opinión pública en 16 países latinoamericanos administrada por una empresa privada. Los resultados aquí presentados se refieren a una encuesta realizada en diciembre de 1997 con promedios simples por país.

¹² El promedio de edad en Latinoamérica es de 27 años, mayor que los 22 años de África pero menor que los 36-38 años de Europa y Estados Unidos más Canadá.

En el mundo contemporáneo se considera que América Latina junto con Asia se encuentran en la tercera etapa de la transición demográfica, al tiempo que Estados Unidos y Europa están en la cuarta etapa y África se está moviendo hacia la segunda etapa. La población joven de Latinoamérica (0 a 14 años) disminuyó de 40 por ciento en 1950 a 32 por ciento en 2000, mientras que la población económicamente activa (15 a 64 años) se incrementó de 56 por ciento en 1950 a 62.5 por ciento 50 años después (Duryea y Székely, 1998).

Existen grandes diferencias demográficas en América Latina: mientras que Nicaragua, Honduras y Guatemala la edad promedio es de 22 años, en Uruguay y Barbados es de 34 años. Los primeros tres países junto con Belice, Paraguay, Bolivia y Haití se encuentran en la segunda etapa de transición demográfica, al tiempo que Bahamas, Trinidad-Tobago y Cuba junto con Barbados y Uruguay se encuentran en la cuarta etapa. El resto de la división política de América Latina está en la tercera etapa distinguiéndose en ella como países "viejos" a Panamá, Jamaica, Brasil, Chile y Argentina.

Tal desarrollo demográfico en América Latina muestra una "ventana de oportunidad" o periodo de baja dependencia que se abrió en 1990 y terminará en el 2040; este periodo se caracteriza por tener una proporción alta de población en edad de trabajar comparada con la población dependiente: jóvenes y viejos. La "ventana" significa una oportunidad de incrementar la inversión en la educación de los jóvenes y de aumentar los ahorros de retiro para la población en edad de retiro, Duryea y Székely plantean que es una buena oportunidad para instrumentar las reformas al seguro social.

Desde el ángulo educativo se aprecia un progreso y una lenta transformación en varios frentes. Tal parsimonia se refleja claramente en un dato: en América Latina tuvieron que transcurrieron 10 años para que el nivel de escolaridad promedio pudiera aumentar en un año. No obstante, las cifras muestran que las nuevas generaciones son crecientemente más educadas que sus antecesoras, con una característica adicional: las mujeres avanzan más rápidamente que los hombres, tanto en su proporción dentro del sistema educativo como en la consecución de mayores niveles de escolaridad.

América Latina se ha rezagado del progreso educativo obtenido en los países industriales e, incluso, en los países del sudeste asiático: cuando se divide el porcentaje de la población con estudios secundarios o mayores entre el porcentaje de la población con estudios

de primaria o menos los datos muestran que de los años setenta a los años noventa, los países industriales pasaron de una proporción de 0.5 a un 1.2; los países del sudeste asiático también mostraron una gran mejoría al pasar del 0.4 a más del 0.6; en contraste América Latina en ese periodo sólo mostró una leve elevación educativa al pasar de 0.2 a un poco menos de 0.25 (Datos de Barro-Lee de 1996, citado por Duryea y Székely, 1998).

La situación todavía es más precaria para ciertos países de la región latinoamericana si se toman en cuenta las profundas diferencias en los años promedio de escolaridad mostrados en el Cuadro 1. Considerando las encuestas nacionales,¹³ Chile aparece en primer lugar con 8.79 años de escolaridad aunque con una polarización muy grande: 6.66 por ciento de la población sin estudio alguno y 16.30 por ciento con estudios superiores. En claro contraste Nicaragua muestra 4.35 años de escolaridad, un 33.98 por ciento de la población sin estudios y solamente un 7.15 por ciento con estudios superiores. Los datos de México exhiben una media de escolaridad de 6.23 años, con 20.24 por ciento de la población sin educación y un 11.95 por ciento con educación superior.

Otro aspecto de la transformación educativa en América Latina es el aumento en años recientes de la varianza de la escolaridad entre países. Más aún, a pesar de que las medidas de desigualdad educativa entre las naciones latinoamericanas han declinado, el efecto neto es el aumento de la varianza en el nivel educativo de la fuerza de trabajo, que pudiera explicar la desigualdad salarial; esta situación se conoce como "la paradoja de Kuznets". Tal paradoja contempla un mecanismo como el siguiente:¹⁴ aunque las nuevas generaciones tuvieran más años de educación y una varianza crecientemente menor, mientras que las viejas generaciones tuvieran una menor escolaridad y una varianza menor que la de los jóvenes, en el caso de que las nuevas generaciones se integraran a la fuerza de trabajo se produce como efecto neto el incremento de la varianza en el nivel educativo de esta fuerza de trabajo renovada (Duryea y Székely, 1998).

En la oferta laboral se observa el papel crítico jugado por el costo de oportunidad de la mujer al incorporarse al mercado de trabajo que, de lograr una tasa alta

¹³ A diferencia de las encuestas de Argentina, Bolivia y Uruguay que sólo incluyen población urbana.

¹⁴ El ejemplo refleja lo que acontece en la región latinoamericana.

Cuadro 1
Distribución de la población por nivel educativo de 25 años o mayores en los años noventa

<i>País y año</i>	<i>Sin educación</i>	<i>Primaria</i>	<i>Secundaria</i>	<i>Superior</i>	<i>Años promedio escolaridad</i>
Brasil 95	20.84	45.37	25.59	8.19	5.24
Chile 94	6.66	43.72	33.31	16.30	8.79
Colombia 95	10.10	45.26	34.42	10.23	6.44
Costa Rica 95	8.25	53.33	23.74	14.67	7.03
R. Dominicana 96+	43.80	36.00	11.10	9.10	...
Ecuador 95	12.05	47.80	25.47	14.68	7.10
Guatemala 1996+	52.70	37.00	5.90	4.50	...
Jamaica +	4.20	64.20	28.60	3.10	...
México 94	20.24	44.23	23.58	11.95	6.23
Nicaragua 93	33.98	40.28	18.59	7.15	4.35
Panamá 95	6.91	38.53	38.09	16.47	8.45
Paraguay 95	7.50	62.85	21.95	7.70	6.09
Perú 96	14.14	33.89	39.26	12.70	7.20
Venezuela 95	12.03	40.68	34.06	13.23	7.20
Argentina 96*	1.59	48.08	29.03	21.29	9.49
Bolivia 95*	11.69	24.08	39.75	24.48	8.82
Uruguay 95*	3.60	48.56	33.42	14.42	8.02

Notas: (+) Cálculos de Barro-Lee (1996).

(*) Encuestas en áreas urbanas y Argentina sólo en la Gran Buenos Aires.

Fuente: Elaboración propia con datos del BID.

de participación, podría sentar las bases para amainar la demanda de trabajo infantil y así alcanzar mejoras en el nivel educativo junto con la elevación del nivel de vida de esa futura fuerza de trabajo. El problema del proceso estriba, no solamente en los logros educativos alcanzados por la madre, sino en los retrocesos potenciales en los mercados laborales causados por madres con mayor nivel educativo que se ven forzadas a abandonar su proyección laboral para impulsar la educación de sus hijos, evidenciando así la falta de instituciones y/ o empresas que proporcionen apoyos en esta dirección.

Acerca de los sindicatos puede afirmarse que las relaciones laborales en América Latina son tan diversas como lo son las condiciones económicas, políticas e históricas de cada país; sin embargo, una característica las une: están permeadas por la intervención estatal en los sindicatos que lo mismo centraliza las negociaciones colectivas en un sistema corporativo como en Argentina, Brasil y México, que las descentraliza en

negociaciones directas como en Perú y Chile (Márquez y Pagés, 1998).¹⁵

Según dichos autores, en la región el "legalismo" es una costumbre fuertemente arraigada para tomar ventaja de la cobertura jurídica proporcionada por el estado. Esa fuerte intervención del estado en América Latina muestra su preeminencia al obligar a la patronal a negociar colectivamente, pero exhibe su lado oscuro al supeditar los objetivos sindicales a la política del gobierno en turno y el costo político económico de mantener una pesada burocracia sindical es alto, tanto para los trabajadores como para los patrones.

Como indicador del poder sindical en la región el Cuadro 2 muestra la densidad de sindicación que tiene un rango del 32.1 por ciento en Brasil hasta el 4.4 por

¹⁵ El corporativismo es una doctrina que propugna la organización de la colectividad sobre la base de asociaciones representativas de los intereses y de las actividades profesionales (corporaciones). El modelo corporativo es anticonflictual, contraponiéndose al modelo sindical (Bobbio, Norberto (1981) *Diccionario de política*, Siglo XXI, México).

Cuadro 2
Densidad de sindicación en América Latina

País	% fuerza laboral no agrícola				% sueldos y salarios de perceptores				% percpt. en sector formal	
	fecha	%	fecha	%	fecha	%	fecha	%	fecha	%
Argentina	1986	48.7	1995	25.4	1986	67.4	1995	38.7	1995	65.6
Bolivia			1994	16.4					1994	59.7
Brasil			1991	32.1			1991	43.5	1991	66
Chile	1985	11.6	1993	15.9					1993	33
Colombia	1985	11.2	1995	7					1995	17
Costa Rica	1985	22.9	1995	13.1	1985	29.1	1995	16.6	1995	27.3
Rep. Dom.	1989	18.9	1995	17.3						
Ecuador			1995	9.8					1995	22.4
El Salvador	1985	7.9	1995	7.2	1985	8.3		1995	10.7	
Guatemala	1985	8.1	1994	4.4	1985	8.2		1994	7.7	
Guyana			1995	25.2						
Honduras			1994	4.5					1994	20.8
México	1989	54.1	1991	31	1989	59.6	1991	42.8	1991	72.9
Nicaragua			1995	23.4					1995	48.2
Panamá			1991	14.2			1991	20.1	1991	29
Paraguay			1993	9.3					1995	50.1
Perú			1991	7.5					1991	18.3
Uruguay	1990	19.9	1993	11.6					1993	20.2
Venezuela	1988	25.9	1995	14.9	1988	29.8	1995	17.1	1995	32.6

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIT / "Relaciones industriales: democracia y estabilidad social", *Reporte del empleo mundial 1997-1998*, (citado en Márquez y Pagés (1998)).

ciento en Guatemala: más en general, los países "grandes" de la región (Argentina, Brasil y México) mantienen una densidad de sindicación por arriba del 25 por ciento (véase Cuadro 2).¹⁶ Los porcentajes son bajos si los comparamos con los países del norte de Europa que ostentan una densidad sindical por arriba del 50 por ciento; sin embargo, comparados con el sudeste asiático son muy similares: 27.9 por ciento en Taiwán, 13.5 por ciento en Singapur, 11.7 por ciento en Malasia y 9 por ciento en Corea, y, exceptuando Centroamérica son superiores a la densidad sindical de Estados Unidos.

Márquez y Pagés (1998) afirman que una característica relevante de la densidad sindical es el desplome

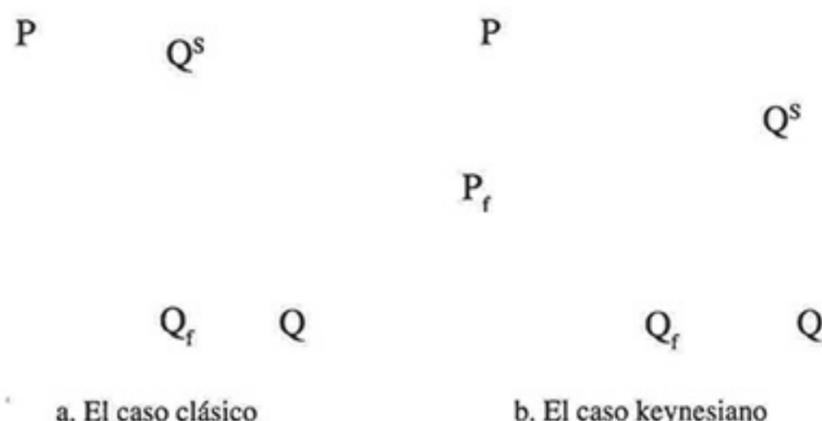
de su afiliación sufrido en 10 años por los trabajadores de todos los países de la región, excepto Chile (véase Cuadro 2), lo cual sugiere un debilitamiento de los sindicatos en América Latina impulsado, quizás, por el avance de las reformas macroeconómicas y estructurales. La otra característica es el nivel salarial, relativamente alto, que tienen los trabajadores sindicados: ejemplo de ello es México en 1991 con la densidad sindical de 31 por ciento donde la tasa de los perceptores de ingresos en el sector formal era del 72.9 por ciento. En Latinoamérica el sector formal concentra a los trabajadores de "altos salarios" en una proporción mayor al doble con respecto al sector "informal".¹⁷

¹⁷ El BID no tematiza un hecho substancial: en América Latina el 65 por ciento de la población económicamente activa (PEA) labora en el sector "informal", donde sus percepciones son menores, en su inmensa mayoría, a las del sector formal.

¹⁶ La densidad de sindicación se obtiene de la proporción porcentual del número de trabajadores sindicalizados entre trabajadores totales.

La explicación de la paradoja laboral dada por los investigadores del BID por medio del análisis de la oferta laboral mediada por aspectos demográficos, educativos, sindicales y otros, es decir, una descripción más o menos ordenada de factores que conforman la oferta laboral de la región, nos parece insuficiente en sentido temporal: no queda explicitado *de dónde proviene y hacia dónde se desplaza la oferta laboral latinoamericana*, tal vez debido a que sus aportaciones carecen de una identidad teórica que establezca reglas determinadas por relaciones funcionales, implicando así compromisos esclarecedores a través de modelos que validen sus elucidaciones. En resumen: la teoría económica no sale a relucir en, por lo menos, la docena de documentos de trabajo actuales del BID consultados sobre la región.

Figura 2



Fuente: Elaboración propia.

Y para muestra un ejemplo de libro de texto: dichas investigaciones ni siquiera toman en cuenta el debate teórico sobre el mercado laboral, que podría definir la forma de la curva de oferta agregada de la región. Este es un debate crucial para abordar la efectividad de la política económica en los diferentes países de la región, ya que si considera válido el enfoque clásico que tiene una flexibilidad permisiva del equilibrio entre oferta y demanda en el punto de pleno empleo y una curva de oferta agregada vertical, el resultado sería que la intervención del gobierno no tendría ningún efecto y por tanto haría inútiles sugerencias al respecto (véase Figura 2a); mientras que si adoptan el enfoque keynesiano con su curva de oferta agregada de pendiente positiva explicada por rigideces salariales, entonces sí sería válido esperar que las políticas económicas gubernamentales sugeridas se trasladaran a la economía

acercándola al pleno empleo. Pasemos ahora a las conclusiones.

Conclusiones

Resumiendo: el bajo crecimiento del empleo y los bajos salarios han sido factores de mucho peso para colocar a América Latina como la región con mayor desigualdad de ingresos en el mundo. En efecto, el problema de esta inequitativa distribución del ingreso comienza en los mercados laborales pero, como ya se ha registrado, su eficiencia en el corto plazo está marcada por la macroeconomía de flujos de capital, necesaria para complementar el ahorro interno, pero, a su vez, causante de una serie de peligros originados en el sector financiero que repercuten en el sector real con el consiguiente impacto negativo en empleos y salarios.

El primer apartado de este ensayo, sustentado en la visión del BID, registra los peligros que conllevan los flujos de capital, dando por sentado el establecimiento de reformas promotoras de estabilidad macroeconómica para moderar, en lo posible, los efectos perversos de los choques externos, respecto a situaciones de choque de mercados financieros que obligan a las autoridades económicas a instrumentar políticas reductoras de esa vulnerabilidad e incluso la posible salida abrupta de capitales.

El supuesto del BID es que tales reformas estructurales y macroeconómicas ayudan a evitar los conflictivos ajustes en ese campo y en el financiero, aunados a depreciaciones del tipo de cambio real, imperfecciones en la información, políticas subóptimas, etc. Más aún, para reducir la volatilidad de los flujos de capital los estudios del BID promueven, con reservas, el establecimiento de regulaciones de entrada y salida de capitales (se inclinan más por la segunda opción) además de la necesidad del establecimiento de fondos de rescate internacional. En ese apartado queda implícita la secuencia: 1) entrada de capital, 2) crecimiento y 3) creación de empleos.

El apartado segundo trata de sintetizar el problema de la desigual distribución del ingreso en la llamada "paradoja laboral" conformada por crecimiento económico mayor con un desempleo rezagado. En busca de explicaciones se exploran las propuestas del Consenso de Washington, del Banco Mundial y del BID. Este último en diversos estudios constata el avance de procesos de apertura de fronteras, liberalización financiera, pri-

vatización de empresas paraestatales y programas de estabilización macroeconómica. Dichos procesos han propiciado el crecimiento mas no la creación de empleos que podría interpretarse como una deficiencia de los actuales planteamientos del BID.

El tercer apartado revisa las preocupaciones de trabajadores latinoamericanos sobre salarios y empleo desarrollando también un análisis de la oferta laboral al realizar un recorrido sobre sus diversos aspectos: la evolución demográfica, los cambios en la educación y la capacitación de la fuerza laboral y de la población en general, las relaciones laborales y la fuerza sindical en la región.

En los informes presentados por el BID se puede apreciar la existencia de crisis recurrentes en las economías de la región por ausencia de articulación del perfil de la demanda de trabajo y el producto debido a disociaciones causadas por la falta de un análisis problematizador de la macroeconomía de flujos de capital respecto al modo como se constituye la demanda en América Latina, todo ello tal vez fruto de la no-adscripción explícita a un enfoque doctrinal.

En el nuevo milenio, la mayoría de las economías latinoamericanas son economías abiertas, con apreciables avances en su sistema estadístico, con mercados más eficientes y receptores de flujos crecientes de capital privado, con fuerte tendencia a aproximar los precios domésticos a los precios externos, con tasas de interés fijadas, cada vez más, por el mercado. Este puede ser un escenario propicio para incorporar el enfoque de las expectativas racionales, pensamiento dinámico inserto en un mundo estocástico donde se problematiza la curva de oferta agregada de Lucas, tanto por el lado del mercado de trabajo (donde el BID no ha probado si esa rigidez existe o no), como por el lado de las expectativas (donde lo más probable es que dicha curva se rigidice por la falta de credibilidad de las políticas económicas instrumentadas en la región).¹⁸

Los economistas del BID ni siquiera han atendido el establecimiento de reglas de política económica aceptando acriticamente la discrecionalidad de los gobiernos en este rubro, por lo que los resultados en política económica doméstica ni siquiera se aproximan a un "máximo", a un óptimo posible de alcanzar por medio

de reglas claras, simples y creíbles para los agentes económicos. Esto lleva a pensar que su perspectiva teórica se alinea al pensamiento de las burocracias de Lima, Buenos Aires o Brasilia a pesar de que la oficina matriz del BID se encuentra en Washington. Este alineamiento constituye un derroche si se toma en cuenta la abundancia de recursos económicos por ahora incorrectamente dirigidos.

El BID parece estar más preocupado por resolver los problemas a las burocracias de la región, intermediarias en el pago de su asesoría, que por trabajadores y agentes económicos que, con sus contribuciones fiscales, finalmente proveen los fondos para dicha asesoría. Ante esta suma de hechos los pagadores en última instancia afectados por los estudios que asumen la defensa de las burocracias domésticas podrían aplicar el enfoque agente-principal: promover la inclusión de cláusulas específicas que premien los planteamientos que resuelvan sus problemas y aplicar penalizaciones para quienes con estudios sesgados encubran las responsabilidades de las burocracias regionales.

Finalmente: ¿por qué los economistas del BID no sugieren opciones de política? Por ejemplo: un choque masivo para incrementar los recursos destinados a la educación. Para acercarse a las causas de esta omisión que raya en fracaso. No puede descartarse como *deliberada* por tratarse de personal experto en los problemas económicos de la región convendría explorar los niveles superiores de directivos del BID con Enrique Iglesias a la cabeza, y preguntarse ¿cuáles son sus obligaciones con los agentes económicos de los países de la región? Porque al fin y al cabo esa burocracia es garante última de estas investigaciones y cada día es mayor la desconexión entre los resultados de tales pesquisas infructuosas y los intereses laborales en Latinoamérica.

Referencias

- Alvater, Elmar, *El precio del bienestar, Expolio del medio ambiente y nuevo (des)orden mundial*, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1994.
- Barro, Robert y J. W. Lee, "International Measures of Schooling Years and Schooling Quality", *Papers and Proceedings*, vol. 86, núm. 2, American Economic Review, mayo, 1996.
- Belser, Patrick, "Does Latin American & Caribbean unemployment depend on Asia labour standards?",

Argumentos en torno al vínculo entre los niveles de credibilidad y la pendiente de la curva de oferta, atendiendo al caso mexicano, pueden encontrarse en Contreras y Talavera (1996), Contreras (1997) y Contreras (1999).

- Working Paper 380*, Interamerican Development Bank, Washington, august, 1998.
- Contreras Sosa, Hugo, "Informe de Gobierno 1997: la oferta agregada y las expectativas", *Economía Informa* núm. 262, FE-UNAM, noviembre, 1997.
- _____, "Entre Washington y Friburgo. La política macroeconómica latinoamericana en los años noventa", en Elvira Concheiro (comp.), *El pensamiento único: fundamentos y política económica*, IIEC/UNAM-UAM/ x-Grupo Editorial Porrúa, octubre, 1999. La versión original del trabajo, en la nota 13, simboliza la inflación esperada como Π^e ; la versión editada alteró esa notación.
- _____, y Fernando Talavera, "La nueva APRE: macroeconomía de la estanflación para 1996", *Economía Informa* núm. 224, FE-UNAM, diciembre-enero, 1996.
- Duryea, Suzanne y Miguel Székely, "Labor Markets in Latin America: A Supply-Side Story", *Working Paper 374*, Interamerican Development Bank, Washington, September, 1998.
- Foxley, Alejandro, "Prólogo" a Víctor Bulmer-Thomas (comp.), *El nuevo modelo económico en América Latina. Su efecto en la distribución del ingreso y la pobreza*, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
- Gavin, Michael, Ricardo Hausmann y Leonardo Leiderman, "The Macroeconomics of Capital Flows to Latin America: Experience and Policy Issues", *Working Paper 310*, Interamerican Development Bank, Washington, April, 1997.
- Gavin, Michael, Ricardo Hausmann y Ernesto Talvi, "Saving Behavior in Latin America: Overview and Policy Issues", *Working Paper 346*, Interamerican Development Bank, Washington, May, 1997.
- Gavin, Michael y Ricardo Hausmann, "Nature, Development and Distribution in Latin America. Evidence on the Role of Geography, Climate and Natural Resources", *Working Paper 378*, Interamerican Development Bank, Washington, august, 1998.
- Hausmann, Ricardo y Miguel Székely, "Inequality and the Family in Latin America", *Working Paper 393*, Interamerican Development Bank, Washington, january, 1999.
- Heyne, Paul, "Efficiency" en David R. Henderson (ed.), *The Fortune Encyclopedia of Economics*, Warner Books, NY, 1993.
- Lora, Eduardo y Carmen Pagés, "La legislación laboral en el proceso de reformas estructurales de América Latina y el Caribe", *Oficina del Economista Jefe*, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, diciembre, 1996.
- Lora, Eduardo y Gustavo Márquez, "The Employment Problem in Latin America: Perceptions and Stylized Facts", *Working Paper 371*, Interamerican Development Bank, Washington, marzo, 1998.
- Lora, Eduardo y Mauricio Olivera, "Macro Policy and Employment Problems in Latin America", *Working Paper 372*, Interamerican Development Bank, Washington, marzo, 1998.
- Márquez, Gustavo, "El desempleo en América Latina y el Caribe a mediados de los años 90", *Working Paper 377*, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, agosto, 1998.
- _____, y Carmen Pagés, "Ties that Bind: Employment Protection and Labor Market Outcomes in Latin America", *Office of the Chief Economist*, Interamerican Development Bank, Washington, febrero, 1998.
- O'Connell, Lesley, "Collective Bargaining Systems in 6 Latin American Countries: Degrees of Autonomy and Decentralization", *Working Paper 399*, Interamerican Development Bank, Washington, May, 1999.
- Sen, Amartya, *Sobre la desigualdad económica*, Editorial Crítica, Barcelona, 1979.
- Talavera Aldana, Fernando, "Crisis financiera en Asia y orden internacional", *Comercio exterior*, vol. 49, núm. 1, México, enero, 1999.
- Williamson, John, "In Search of a Manual for Technopols", en J. Williamson (ed.), *The Political Economy of Policy Reform*, Institute for International Economics, Washington, 1994.